

Bolivia como un paradigma de movimientos sociales en la América Latina del siglo XXI

José María Aranda Sánchez* y Verónica Vega Rocha**

Recepción: 8 de junio de 2009
Aceptación: 5 de marzo de 2010

* Instituto de Estudios sobre la Universidad,
Universidad Autónoma del Estado de México,
México.

** Pasante de la Licenciatura en Sociología,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Autónoma del Estado de México,
México.
Correo electrónico: arandas_301@hotmail.com y
verona_llavero@hotmail.com

Resumen. En el contexto de la debacle del neoliberalismo en América Latina, hoy se manifiesta en Bolivia un nuevo tipo de movimiento social, integrado por varios movimientos que han logrado llegar al poder por la vía electoral, y que presentan características distintivas que no encuentran acomodo dentro de las explicaciones y modelos anteriores. Por ello, en este artículo se busca argumentar a favor de concebirlo como representativo de un nuevo paradigma cuyos principales rasgos se exponen en forma sintética, destacando el componente étnico y la preocupación por la inclusión de los pueblos originarios en un proyecto nacional pluricultural.

Palabras clave: Bolivia, movimiento social, autonomía, resistencia e identidad.

Bolivia as a Paradigm of Social Movements in the XXI Latin American Century

Abstract. In the context of the debacle of neoliberalism in Latin America, Bolivia surge as a new kind of social movement, made up of several movements that have managed to come to power through elections, and have distinctive features that are not accommodated within explanations and earlier models. We highlight the ethnic component and concern for the inclusion of native people in a multicultural national project.

Key words: Bolivia, social movement, autonomy, resistance and identity.

Introducción

Si le tomamos la palabra a Carlos Figueroa Ibarra¹, estamos asistiendo a la debacle de las concepciones neoliberales y de la caída libre de la llamada economía de mercado y democracia liberal y representativa tal como las conocimos. En efecto, seguramente, más que “el final de la historia”, vivimos el fin de su fase de capitalismo neoliberal y “pensamiento único” como el destino final de la humanidad. Se trata de poner las cosas en su lugar, y dejar en claro que el neoliberalismo ha sido un fracaso, sobre todo si tenemos en cuenta las promesas desde la teoría de Friedman y la aplicación de la economía política, que la economía de mercado elevaría la productividad entonces detenida, se decía, por el estatismo y asistencialismo del Estado de Bienestar; que la elevación de la productividad generaría que la riqueza se derramase por el conjunto de las sociedades y con ello la solución de los grandes problemas y carencias sociales. Asimismo, que la economía de mercado abonaría a la democratización en el planeta, incluso en una práctica indispensable e inevitable.

Pero en el mundo real de los hechos cotidianos el neoliberalismo únicamente pudo implantarse por medio de la violencia y/o destrucción de la democracia, o sea, por lo general necesitó

regímenes dictatoriales o autoritarios para imponerse; y en los casos de democracias liberales y representativas, las reformas neoliberales se pusieron en práctica a espaldas de la población y creando Estados de excepción como fue el caso de la Bolivia de Paz Estenssoro, o bien mediante la represión abierta como lo hizo Thatcher en Gran Bretaña a mediados de los ochenta.

En América Latina no sólo fracasó el neoliberalismo en lo económico, estabilidad política, avance en la democracia, sino además en cuanto a la condición de los Estados, ya no “obesos y corruptos”, sino reducidos y musculosos, porque la realidad es que ahora observamos que la corrupción campea a sus anchas. Ciertamente estados fuertes en lo represivo pero plagados de vacíos estatales que son llenados por poderes informales de carácter perverso.

En este contexto es donde han surgido importantes movimientos sociales, algunos de los cuales lograron articularse en exitosas propuestas electorales para avanzar hacia un horizonte posneoliberal. Tal es el caso de Bolivia, donde puede hablarse de una derrota del neoliberalismo, puesto que estalló

1. Sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su artículo “América Latina en el umbral del Posneoliberalismo”.

una verdadera revolución y los protagonistas tomaron La Paz, paralizaron al ejército, derrocaron al presidente y al gobierno. Se trata de un hecho que constituyó un acontecimiento fundacional, es decir, histórico y trascendental, por lo que puede afirmarse que Bolivia ya no será la misma.

Asimismo, es importante señalar que el caso de Bolivia no se presenta aislado de otras acciones colectivas de particular repercusión, en especial las experiencias del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil; del movimiento de los autonomistas en Ecuador, y del movimiento piquetero de los desocupados en Argentina, no sólo debido a que se expresan como rechazo al neoliberalismo y las nocivas influencias estadounidenses en la región, sino además porque se trata de manifestaciones populares de los sectores excluidos de América Latina que lograron articular el descontento a través de procesos sociales construidos desde las singularidades de cada situación concreta.

Así, en el MST en Brasil cabe destacar el impresionante movimiento cooperativista, la ocupación de los territorios como instrumento de presión, así como expresión de rebeldía organizada y formación de la conciencia de clase, a la par con la construcción de una identidad acorde con el valor de su organización. Otra de las “novedades” de este movimiento social es que el núcleo de su organización radica en los grupos de familias; y aunque el MST siempre ha propiciado la lucha pacífica, genera múltiples experiencias de lucha permanente, donde la educación se ha convertido en un recurso esencial, sobre todo por su carácter masivo y pluralista, además de la planeación de todas y cada una de sus acciones colectivas con el propósito central de impulsar una reforma agraria radical, caracterizándose como uno de los movimientos sociales más disciplinados de América Latina, y de los más eficientes (Harnecker, 2002).

En lo que respecta a las organizaciones y movimiento social de los piqueteros en Argentina, sin duda se le reconoce como uno de los más novedosos de la era neoliberal en América Latina, que puede considerarse en buena medida consecuencia de los cambios en las formas de sociabilidad que alteraron significativamente la vida cotidiana, como respuestas sociales al desempleo, la precarización del trabajo, la informalidad y la flexibilización, transformaciones que incidieron negativamente en un proceso de “descolectivización”, en la educación y la salud pública, sobre todo.

Se trató de una afectación del trabajo como centro organizador de la vida colectiva de miles de trabajadoras y trabajadores, que fue derivando en la representación del empleo en términos de un “nuevo” espacio de experiencia, de reproducción, creación y constitución de subjetividades, en el marco de la hegemonía neoliberal y las condiciones de su disputa.

En tal sentido, la construcción de la demanda por empleo y exigencia al Estado de cumplimiento de su responsabilidad social para con los trabajadores, instituyó un campo de protestas que conlleva la identificación de alteridades, modos de participación y repertorios de acción, ante la “oscilación” del gobierno entre el rol de interlocutor y el de enemigo así como aliado (Retamozo, 2006).

Por cuanto se refiere al movimiento por la autonomía en Ecuador, que presenta más rasgos comunes con el de Bolivia que los antes mencionados, también se radicalizó en contra de las medidas neoliberales del gobierno, que incluyeron la dolarización de su economía y el “ajuste estructural”, con alza generalizada en los precios de combustibles y artículos básicos. La protesta amplió las vías de participación de la población orientadas a una posible representación en la Asamblea Constituyente, que habría de conformarse por ciudadanos y no por partidos políticos, bajo el impulso de numerosos movimientos sociales.

El gran esfuerzo de lucha por la autonomía se sustenta en un proyecto de estado plurinacional, y específicamente es concebido por la CONAIE (Coordinadora Nacional Indígena de Ecuador) como un movimiento plurinacional, por la autodeterminación y territorial, que defiende el reconocimiento étnico y la construcción de intereses emergidos de grupos indígenas, cuya identidad se tiene que validar constitucionalmente en el respeto a las diferencias y similitudes, frente a una población mayoritariamente mestiza (Mirza, 2006; Stolorowicz, 2007).

En este artículo se presenta una caracterización de los movimientos sociales en Bolivia y sus principales tendencias y peculiaridades (Zibechi, 2003), considerando que sobresalen nueve rasgos principales: a) arraigo y defensa del territorio; b) autonomía y resistencia; c) revalorización de la cultura y afirmación de la identidad; d) capacidad para formar sus propios cuadros; e) nuevo papel de las mujeres; f) la preocupación por el trabajo y la relación con la naturaleza; g) formas de acción autoafirmativas; h) protagonismo en el proceso de cambio social y i) contribución a la profundización de la democracia.

1. Principales características del movimiento social en Bolivia

Para identificar los rasgos distintivos y novedosos del movimiento social que llegó al gobierno en Bolivia en 2005 —que congrega a varios movimientos históricos y emergentes—, una posible vía es encuadrarlo dentro de lo que podríamos denominar como los paradigmas de los movimientos sociales, mismos que en las ciencias sociales no se presentan como en las ciencias naturales (Khun, 1971) en términos de modelos que superan y se oponen a paradigmas ante-

riores, sino que más bien ofrecen otra explicación para un diferente tipo de objetos de estudio (Giménez, 2004), en este caso los movimientos sociales. En tal sentido, el movimiento social en Bolivia tiene características únicas, al lado de algunas que igualmente expresan otros tipos de movimientos sociales; pero que en lo fundamental sí apuntan a un diferente paradigma dentro del cual se ubica el que aquí interesa analizar.

Un primer paradigma, de los aún vigentes, es el de los Nuevos Movimientos Sociales (Javaloy, 2001), cuyo eje central es el actor identitario, que no persiguen el poder político; pero se orientan a cambios de valores, de organización, participantes y tipos de acciones que impulsan; mientras que el paradigma de la Movilización de Recursos (Javaloy, 2001) se enfoca en el actor racional, calculador; pero que le otorga gran importancia a la organización (Javaloy, 2001). Frente a estos paradigmas, el Movimiento social internacional por otra globalización representa otro paradigma cuya novedad está aun siendo estudiada (Tarrow, 2004), destacando la resistencia-red, ideología anticapitalista y pluralismo, identidad planetaria, desobediencia civil, acciones de empoderamiento, simbolización de conflicto, acción reflexiva y acción global como solidaridad global (Aranda, 2005). Para el caso de Bolivia puede hablarse de un nuevo paradigma, no sólo debido a que presenta un conjunto de caracteres propios sino además porque corresponde a condiciones particulares de la América Latina actual; pero donde lo más importante es que los movimientos sociales no tienen que ver con los anteriores paradigmas, mostrando que se trata de procesos diferentes que exigen por lo mismo otro marco explicativo y nuevas reflexiones.

2. Arraigo y defensa territorial

Un primer rasgo característico del movimiento social en Bolivia, principalmente representado por el MAS (Movimiento Al Socialismo) de Evo Morales, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros, tiene que ver con la importancia determinante del arraigo y defensa del territorio, ya que, si bien la reforma agraria de 1953 dio a los campesinos mayor acceso a la tierra, distribuyendo más de 10 millones de hectáreas a casi 200 mil jefes de familia entre 1953 y 1972, los principales beneficiarios fueron los “colonos”, que se vieron repentinamente liberados de su obligación de trabajar gratuitamente para los hacendados, obteniendo así el título legal de su diminuta *sayana* o *pegujal*, que era la parcela de tierra otorgada por el hacendado a cambio de su trabajo. Sin embargo, las cifras indican que para 1963 los latifundistas aún poseían cerca del 70% de la tierra, ya no el 95% como

en 1950. Los pequeños terratenientes, que eran dueños de parcelas de 5 a 20 ha, contaban con el 12% del total; y los que tenían parcelas de menos de 5 ha (minifundistas) reunían apenas el 8% de la tierra; aunque constituían casi tres cuartas partes del sector campesino (Zavaleta, 2003). Para 1992 el 97% de la gente del país vivía en el campo, lo que significaba el peor índice del mundo (Cockcroft, 2001).

Hacia mediados de los noventa se constataba que la reforma agraria tampoco había cumplido con su objetivo de garantizar la tierra para quien la trabaja y, con la evidente complicidad de los gobiernos civiles y militares de derecha, se regresó a una reconcentración de la tierra en unas cuantas manos; es decir, a nuevas formas de latifundio y a un *surcofundio* del que los campesinos e indígenas son sus únicas víctimas (Moldiz, 2007). En cifras frías encontramos que de los 36 millones de hectáreas cultivables y de pastoreo, 32 millones se concentran en no más de 10 mil unidades empresariales, en tanto que 4 millones de hectáreas se encuentran en manos de unos 2 millones de campesinos, lo que ocasionó que otros 2 millones de campesinos aproximadamente no tuvieran tierra o ésta fuera insuficiente. Incluso, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), promulgada en la gestión anterior de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), más que resolver el problema de la tenencia de la tierra, lo profundizó (Moldiz, 2007).

La miseria campesina provocó que el sector agrario, el menos politizado del movimiento democrático, se convirtiera en el núcleo conservador del país, en su calidad de productores independientes. Lo anterior aunado a la reforma agraria, veinte años después, provocó que cada parcela se convirtiera en una suerte de fortaleza donde se defendía la revolución tal como era, o sea, como revolución burguesa, por lo que en el fondo defendían su derecho a estar dentro de la historia por primera vez; y no es de extrañar la intensidad con la cual se combate por un pedazo de tierra aún entre campesinos pobres, como quien defiende su vida (Zavaleta, 2003).

Asimismo, hay que tener presente que, en un país predominantemente indígena, donde no habían sido dueños más que de su miseria y tragedia desde la conquista y colonización, el arraigo a la tierra se presenta como el destino negado ancestralmente, con la eterna promesa del retorno del espíritu de *Ayllu* que indicaba la imposibilidad de enajenar la tierra puesto que ésta es de todos, la madre de todos. Es el espíritu que sobrevivió como estructura fundamental de las relaciones de producción en torno a la reciprocidad y la ayuda mutua. Se trata de una compleja forma de trabajo colectivo con base en un uso determinado de la tierra (Arriarán, 2007).

Se trata de una organización fundada en la propiedad colectiva de la tierra, la reciprocidad y ayuda mutua en el trabajo, así

como en el desempeño de cargos políticos como un servicio social a la comunidad (y nunca como lucro individual). Razón por la cual representa una alternativa efectiva de organización al sistema capitalista, vinculada estrechamente a una democracia autogestionaria; aunque no podría afirmarse que con ello basta para avanzar a una sociedad más justa e igualitaria.

3. Autonomía y resistencia

La lucha por obtener la autonomía y por lo tanto mantener la resistencia en contra de muchos enemigos de los pueblos originarios, así como por la unificación de todos los sectores sociales excluidos, explotados y sometidos al poder político por siglos y décadas, ha derivado en que precisamente el objetivo de construir sus espacios de autodeterminación y autogobierno sea uno de los más importantes y que ha movilizó sistemáticamente a las masas para avanzar en tal sentido, de tal manera que cuando se dan pasos firmes en materia de resistencia igualmente se afianza la autonomía puesto que se trata de una resistencia activa, es decir, que no únicamente se conforma con mantener la cultura, refugiada en el ámbito de la música, la religiosidad (sobre todo de los “pachamánicos”), incluso la vestimenta y ciertos rituales, lo que en general siempre se ha autovalorado por las distintas etnias bolivianas, sino la resistencia actuante con base en la organización y la exigencia de los derechos, lo que ha llevado a tomar acciones radicales, incluso armadas, en la defensa de la tierra, los recursos y el trabajo.

Sin duda una de las más recientes expresiones de orientación autonómica fue el referéndum en Cochabamba en el año 2000, donde se consultó a 50 mil personas para decidir, como sociedad al margen del Estado, el destino de la privatización del agua. Lo relevante, entonces, fue la acción reflexiva y de análisis en torno a un problema social ampliamente legitimado y que, con todo el derecho que les asistía, ejercieron autonomía para debatir y llegar a una decisión trascendental para su vida social.

Los aymaras se han levantado decenas de veces en los últimos 224 años, para enfrentar a sus opresores: desde la corona española, pasando por el Estado blanco, hasta las transnacionales, como ocurrió con la Suez en El Alto, ciudad aymara de casi 800 mil habitantes. Siglos de opresión y discriminación (racial, social, económica) los han vuelto rebeldes y desconfiados con justas razones (García, 2007).

Por ello, las distintas formas y estrategias de resistencia, sobre todo de parte del MAS, van incluso allende del conflicto dentro del que toma posición el movimiento, para presentarse como disposición de lucha, factor constitutivo del movimiento y sus acciones colectivas y eje de articulación de los marcos de significación que otorgan sentido a esas acciones.

Tampoco se busca, como en los intentos recientes de “autonomía” encabezada por los grupos de productores adinerados y de ideología fascista y golpista, pretender separarse de la nación, o bien del proyecto constituyente para dar finalmente paso a una verdadera integración nacional y cuestionar al régimen legalmente establecido, sino de marcar una necesidad plenamente justificada para desarrollar su proyecto étnico dentro de las leyes y principios de convivencia de la nación.

4. Revalorización de la cultura y afirmación de la identidad

Este rasgo sobresaliente del movimiento social que nos ocupa, si bien no es del todo novedoso dentro de las expresiones de los “nuevos movimientos sociales”, y en particular desde la perspectiva de Touraine (1980), para el MAS y como elemento aglutinador de las acciones colectivas, tanto ancestralmente como en particular desde la revolución de 1952, ha venido adquiriendo un sentido que incluso raya en el fundamentalismo; pero que es del todo comprensible debido a su función de *núcleo duro* de los descontentos, protestas, sublevaciones y todo tipo de movilizaciones para hacer valer su voz, sus derechos y aspiraciones a ser tomados en cuenta, como parte de la historia y a mejorar en su calidad de vida, así como a participar en la toma de decisiones de un país eminentemente indígena y culturalmente identificado con el legado inca y andino.

Por ello, la diferencia principal en cuanto a la revalorización de su cultura, respecto de otros tipos y formas de acción colectiva contestatarias, o con aquellos movimientos sociales —en su momento considerados como “nuevos”—, radica en que no únicamente se refiere el factor cultural al hecho de que, a diferencia de los “viejos” movimientos, no buscan reivindicaciones materiales sino más bien simbólicas, con otros valores y significaciones, como es el caso del ambientalismo, que exige revalorar el ambiente, o el movimiento feminista que pugna por la equidad de género. En el caso de la cultura indígena boliviana, de sus etnias quechua, aymara y guaraní principalmente, se ha centrado históricamente en rituales que facilitaban los fenómenos de posesión de las divinidades prehistóricas (huacas) en el cuerpo de los practicantes. Se trata de una forma de rebelión simbólica que constituyó una vía de separación entre los indios y los españoles. Era una especie de cataclismo (pachacuti) que buscaba destruir mágicamente a los conquistadores (Arriarán, 2007).

Lo importante a destacar es el hecho de que la resignificación de la cultura y la afirmación de la identidad van de la mano, ya que mientras la primera se alimenta cotidianamente y su carácter de cosmovisión es parte de las formas de cultura popular mantenidas y practicadas consistentemente, la identidad del indígena rebelde, como ya se indicaba, en el

espíritu de *Ayllu* cuenta con una memoria colectiva siempre presente y efectiva, ya sea recordando el movimiento de resistencia de Tupac Amaru (en 1780), así como la rebelión del “temible” Willka (en La Paz), y ya en el siglo xx (1921) la rebelión de Machaca, que encabezó la negativa de varias comunidades a ser absorbidas por los latifundios apoyados por el gobierno y el ejército. Y aún el más cercano Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK) en el que participaron Genaro Flores, entonces principal dirigente del movimiento campesino agrupado entonces en torno a la Confederación Nacional, y Víctor Hugo Cárdenas, que a la postre llegaría a ser vicepresidente durante el gobierno de Sánchez de Lozada (Arriarán, 2007).

Entonces, se va gestando el llamado indianismo Katarista, que no nace como discurso político que busca resignificar de manera sistemática la historia, la lengua y la cultura, sino como un discurso denunciativo e interpelatorio que, asentado en la revisión de la historia, echa en cara la imposibilidad de cumplir los compromisos de ciudadanía, de mestizaje, de igualación política y cultural, con lo cual el nacionalismo se acercó al mundo indígena campesino después de 1952 (García, 2007).

El punto crítico es que, con tal concepción, el indígena aparece no únicamente como un sujeto político, sino también como sujeto de poder, de mando, de soberanía, donde toma fuerza y sentido el discurso de la especificidad de la identidad indígena aymara. Es decir, el indio aymara se presenta ahora como identidad colectiva y como sujeto político encaminado a un destino de autogobierno, de plena autodeterminación. Con ello, el discurso adquiere realidad actual; es decir, permite centrar el discurso en ámbitos territoriales específicos, en masas poblacionales verificables y en sistemas institucionales de poder y capacidad de movilización más afines y efectivos (García, 2007).

5. Capacidad para formar sus propios cuadros políticos

Como otra de las novedades del MAS, y de los demás movimientos y organizaciones que conforman el bloque que llegó al poder en Bolivia, especialmente el MIR y el movimiento cocalero, es importante resaltar la formación de sus propios cuadros, lo que indica no sólo el grado de cohesión y acuerdo ideológico al interior de las organizaciones, principalmente las indígenas y campesinas, sino además el hecho de que han alcanzado un nivel de reflexividad significativo, en la medida que la autoconciencia de sus acciones les ha exigido contar con esquemas de educación y capacitación de sus cuadros dirigentes; pero también la interacción con otras fuerzas políticas, tanto simpatizantes como opositoras fueron exigiendo una preparación sólida a fin de poder difundir y defender sus

ideas y planteamientos, así como oponer argumentos sólidos y viables a favor de sus causas y acciones.

El otro componente reflexivo, que igualmente impuso la necesidad de contar con marcos de significación a partir de los cuales otorgar sentido a sus acciones colectivas ha sido la constante demanda de responder a las consecuencias de sus actos, es decir, a las diversas formas e intensidades con que el contexto inmediato incide en el movimiento, razón por la cual no era suficiente replegarse en ánimo defensivo sino poder desplegar banderas y entrar en diferentes negociaciones y conflictos. Todo ello, sin duda, fue marcando determinados ámbitos en que no cabía la improvisación o la retórica, sino consistencia y pertinencia en el actuar colectivo.

Puede afirmarse que la motivación por incluir la formación de cuadros como parte de las acciones dentro del movimiento social datan del año 1952, paralelas al triunfo de la revolución democrática popular, ya que con el avance de las masas se abría la posibilidad no únicamente de intervenir en la toma de decisiones políticas en el gobierno, sino además de ampliar las bases de apoyo del mismo y de sus simpatizantes reales y potenciales. En tal situación, el acercamiento de las clases medias al indianismo se empezó a dar a través del marxismo;² aunque los intelectuales y activistas de esa orientación en las primeras aproximaciones no supieron desprenderse de las visiones marxistas cercanas a la ideología de modernización industrial en lo económico, y de consolidación del Estado nacional en lo político. Tal parecía que, en el fondo, todo el programa revolucionario de los distintos marxismos de las primeras etapas, hasta los años ochenta, tuvo perspectivas similares.

Coincidiendo con lo que podría denominarse como el quiebre de la izquierda tradicional en Bolivia que se aceleró con la imposición del neoliberalismo en el país, y ante la inminencia de una vinculación entre la ideología y pensamiento socialista con el sector indígena, se recupera la lectura de Marx, de sus análisis acerca de las identidades difusas; pero también sobre la cuestión nacional, de tal manera que a la luz de los insumos del indianismo y katarismo como identidades bien cimentadas y en un proceso de articulación con un recambio en la percepción de la política y por lo tanto de su potencialidad para conformar un gran movimiento emancipador que no dejaba de tener como objetivo llegar a ser gobierno, la formación sistemática de cuadros sólidamente preparados para a su vez multiplicar la labor de concientización y educación socialistas ocupó un lugar especial y prioritario dentro de las actividades que ya no se dejaron a la voluntad y capacidad

2. Sobre todo la versión impulsada por René Zavaleta (2003), que buscó impulsar una reconciliación de indianismo y marxismo capaz de articular los procesos de producción de conocimiento local con los universales.

de unos cuantos intelectuales, sino que a partir de entonces empezó a ser parte del programa interno, con más y mejores condiciones objetivas y subjetivas para llevarla a cabo formalmente (García, 2007).

El caso emblemático de la formación de sus propios cuadros políticos es sin duda Evo Morales. Asimismo, debido a que muchos de los “cursos” tenían que ofrecerse en los distintos dialectos de las etnias respectivas, fue necesario preparar materiales idóneos, es decir, adecuarlos ya fuera como panfletos o pequeños libros que, sin dejar de analizar las cuestiones centrales, lo hicieran con la pedagogía adecuada a la cultura y forma de pensar de los destinatarios.

El eje de toda la formación política es la construcción social del socialismo, entendido como un complejo proceso de aprendizaje, concientización y adiestramiento político y estratégico táctico, incluso para la sublevación armada y el enfrentamiento militar con las fuerzas del gobierno de derecha, definiendo los caminos de la izquierda, tanto política como radical, con el propósito primordial de continuar y mejorar la formación de cuadros para el movimiento popular revolucionario.

6. El nuevo papel de las mujeres

Al parecer, en el contexto latinoamericano, Bolivia se distingue por ser uno de los contados casos de experiencia política organizada de mujeres, en particular con los comandos Femeninos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que constituyeron muy importantes contingentes de lucha antioligopólica entre 1946 y 1952; así como los “Comités de Amas de Casa” que funcionaron en las minas nacionalizadas en 1961, que aportaron a la lucha del sector minero nuevas formas de organización y participación política y sindical de las mujeres mineras (Ardaya, 1983).

Lo destacable es que toda la dinámica de participación de las mujeres fue muy relevante e incluso en determinados momentos decisiva, ya que formaron parte de los grupos de resistencia, interviniendo como agitadoras y propagandistas, mientras que durante la insurrección de 1952 participaron directamente en las luchas callejeras y en episodios violentos. Puede decirse que su colaboración siempre estuvo ligada a los destinos del MNR, por lo cual surgió, se consolidó y declinó junto con él, en tanto que las organizaciones de mujeres mineras se generaron, avanzaron y afianzaron cada vez más su participación conjuntamente con los sindicatos mineros.

3. Toda una serie de acciones colectivas “cotidianas”, como reuniones preparativas, elaboración de documentos, propaganda, y muchas otras, como soporte de las movilizaciones.

Ahora bien, aunque podría considerarse que las dos organizaciones mencionadas fueron en su momento las principales, también es justo reconocer otras de menor jerarquía: la Unión de Mujeres de Bolivia (UMBO), fundada en 1962, y la Federación Democrática de Mujeres de Bolivia (FDMB), las dos impulsadas por la izquierda boliviana; aunque sin haber logrado una inserción masiva en la población femenina.

Entonces, cabe señalar que es dentro del MNR que las mujeres empiezan a participar activamente y aprenden a hacer política, en la perspectiva ideológica antioligárquica y con base en un fuerte nacionalismo-indigenismo, en el marco de una revisión crítica de la historia de Bolivia, y de la mano del proletariado militante antiimperialista. Lo más relevante de esas experiencias es que fueron pasando de la asignación de tareas básicamente femeninas, como las apelaciones judiciales, los oficios religiosos, correos clandestinos, marchas callejeras, cuidado de enfermos, huelgas de hambre y otras, a una verdadera participación en las contiendas, ya que durante la sublevación de 1952 –la cual podría considerarse como una lucha de clases– su participación fue fundamental en los frentes de combate.

Más adelante intervinieron en forma determinante como electoreras, más no como elegidas, que ayudaron al triunfo del MNR en 1956, e incluso fueron seleccionadas algunas de las más activas para formar parte de una especie de “policía secreta femenina” para Víctor Paz Estenssoro. También fueron utilizadas como “grupos de choque” en enfrentamientos callejeros contra opositores al gobierno. Por ello es que su participación fue decayendo con la pérdida de vigencia y consecuencia del MNR; en tanto que el apoyo político de los comités de amas de casa, que llegaron a radicalizarse y tener influencia en los movimientos populares, resultaba imprescindible a la lucha del sindicato (Ardaya, 1983).

En ese sentido, y toda vez que también las mujeres aparecen como productoras, campesinas indígenas sin tierra y con múltiples obligaciones domésticas, además de los compromisos propios del activismo político, han ido logrando que se les revalore, considere y otorgue confianza para poder intervenir, como siempre lo hicieron, pero ahora en condiciones de igualdad y equidad como combatientes cuya presencia y actuación resultan centrales.

En una palabra, las mujeres han adquirido un nuevo rol, completamente protagónico y responsable, apareciendo “hombro con hombro” con los hombres en la mayoría de las grandes tareas, movilizaciones y micromovilizaciones,³ lo que le imprime un sello particular al movimiento social, puesto que la diferencia de sexos, tanto a nivel de la estructura interna como en la división del trabajo y el peso relativo de las demandas, son tomadas en cuenta con criterios de equidad que perfilan

un avance importante como organización social y, ahora, como sector empoderado⁴ dentro del movimiento y socialmente.

7. Preocupación por la organización del trabajo y relación con la naturaleza

Para comprender y dimensionar la importancia de esta característica particular del movimiento social que nos ocupa, es necesario tener en cuenta que hasta 1952 y aún hasta entrados los años ochenta, el proletariado minero, considerado una clase social nacional determinante en el impulso a las luchas sociales, que no solamente expresaba y sintetizaba la contradicción histórica fundamental al interior de la sociedad capitalista boliviana, sino además por haber elaborado planteamientos de alcance nacional que le permitieron encabezar y movilizar al conjunto de las clases sociales explotadas y oprimidas en contra de las políticas de la oligarquía y el imperialismo, precisamente debido a la imposición del neoliberalismo vio frenado el desarrollo de la conciencia de los trabajadores, los que no obstante la realización de movilizaciones masivas jamás pudieron romper los contenidos gremialistas y economicistas de sus demandas.

Por ello, la clase obrera, y particularmente el proletariado minero, debilitado en su base material, no sólo vio reducida su capacidad de presión sobre el Estado, sino que también resintió el debilitamiento de su influencia sobre el conjunto de las clases oprimidas y explotadas, razón por la cual el conjunto de las movilizaciones y protestas no pudieron más que perder fuerza, perspectiva y consistencia (Moldiz, 2007).

En ese contexto, es que, ciertamente fortalecido desde el triunfo popular de la revolución de 1952, pero en esos años aún sin la conciencia de su papel histórico hacia delante, el movimiento campesino, heterogéneo en su proceso de constitución, se convirtió desde finales de los años ochenta en un invaluable factor de resistencia social, ya que, empujado por la difícil situación material que se reiteraba y agravaba debido a la concentración de la tierra en unas cuantas manos, además de factores culturales que no hacían sino machacar la exclusión y el racismo, el movimiento campesino recuperó la memoria histórica y en su condición de indígena emprendió una renovada lucha implacable en contra del neoliberalismo y del imperialismo, con el propósito firme de no dejar de consolidar fuerzas sociales y plantear alternativas viables para asegurar opciones de trabajo y una revaloración de la naturaleza, que hasta entonces no había recibido la atención requerida (Mires, 1991).

Fue entonces que el campesinado-indígena asumió su papel de actor principal en la lucha por la recuperación de los recursos naturales. Asimismo, impulsó acciones colectivas a favor de una nueva ley de tierras que pudiera revertir la tendencia de nuevas formas de latifundio; aunada a la defensa del agua, que ya estaba

en las intenciones privatizadoras de las clases dominantes; y la no erradicación de los cultivos de coca pretendida por los Estados Unidos, sentaron las bases para el resurgimiento de esa enorme fuerza social que en múltiples ocasiones ocupó real y simbólicamente las principales ciudades y carreteras de Bolivia, incluso la sede de gobierno, en amplias movilizaciones que no dejaban de expresar de manera intransigente la voluntad no sólo de ser tomadas en cuenta sus propuestas sino además de plantear alternativas para mejorar su condición y la defensa de la naturaleza (Serna, 2007).

Entonces, con el impulso logrado a finales de los ochenta, y la corriente de oposición del movimiento cocalero de 2000-2001, las demandas para los productores que habían dejado forzosamente el cultivo de coca se orientaron a exigir las alternativas productivas prometidas por el Estado, que al no cumplirse o no resultar rentables desataron una serie de marchas y bloqueos carreteros que no concluyeron sino hasta 2001 cuando por fin gobierno y campesinos firmaron un convenio que incluyó la suspensión de las movilizaciones, el despeje de las carreteras y el retiro del ejército de la principal ruta del país, que impedía avanzar a los labriegos, además de la discusión de la ley antidrogas y un debate formal sobre la ley de privatización de las empresas del anterior gobierno de Sánchez de Lozada. Cabe señalar que la vida de los campesinos aymaras cultivadores de la planta de coca, no gira únicamente entorno a encontrar en ella un medio de sobrevivencia por su venta, sino además y principalmente en mantener esa actividad como simbólica de su ser y su intercambio con la naturaleza, heredada de su pasado indígena, por lo cual puede comprenderse la trascendencia desde la construcción de significados cargados de elementos cosmogónicos que alimentan su identidad y dan sentido a su trabajo colectivo.

De ahí que uno de los ejes del movimiento indígena y campesino que nuclea al MAS sea justamente la defensa de las fuentes de trabajo al paralelo con la protección de la naturaleza, como una mancuerna indisoluble de propósitos y demandas que el movimiento ha establecido como parte de su agenda de lucha, exigible para el gobierno en turno, a la vez que generación de un polo de atracción articulado alrededor de demandas específicas, como una multiplicación de irradiación de los discursos que se orientan en la ruta de la democratización “desde abajo”, buscando tanto la deliberación colectiva como el afianzamiento de “campos de fuerza” que dirigen las acciones colectivas por todas las vías posibles, sean institucionales o de rebeldía social.

4. Como la capacidad para asumir un lugar y una actitud de poder, no similar al ejercicio autoritario del mismo, sino como práctica demostrativa y simbólica de un cambio bajo la lógica de quienes ahora pueden tener determinado “control” de las circunstancias.

8. Formas de acción autoafirmativas

Es de llamar la atención el hecho de que las formas de acción tradicionalmente llevadas a cabo en las protestas, donde la huelga era la resistencia por excelencia, tienden a ser sustituidas por formas autoafirmativas, por medio de las cuales los nuevos actores se hacen visibles y reafirman sus rasgos y marcas de identidad. Tal es el caso de las “tomas” de las ciudades por parte de los indígenas, representando la reapropiación, material y simbólica, de un espacio que se les presenta como “ajeno”, a fin de otorgarle otro significado (Dávalos, 2001). Se trata de acciones colectivas que ya no sólo buscan ser un espejo de la sociedad a través del cual se reflejen problemas no del todo vistos o no reconocidos; y tampoco únicamente presentar a la sociedad llamados de atención para sensibilizar y buscar legitimación, sino que se orientan abiertamente a demostrar fuerza, decisión y clara intención de incidir de manera importante como parte de un conflicto que no ha recibido el trato requerido por parte de los adversarios a fin de poder solucionar la cuestión en disputa.

Como ya se ha comentado más arriba, el movimiento social en Bolivia desde hace décadas ha venido practicando las acciones de corte de carreteras, toma de ciudades, sublevaciones masivas en forma de levantamientos populares, sin dejar de llevar a cabo marchas mítines y otras vías de lucha “en las calles”. Sin embargo, lo distintivo últimamente es que tales acciones tienen un efecto notable de autoafirmación, no sólo porque prácticamente en todos los casos han resultado exitosas, sino además a causa de que elevan la “autoestima colectiva”, al afianzar las demandas y fortalecer la unión; pero también en el sentido de avanzar dentro de las crisis, practicar “empoderamientos” eminentemente indígenas y políticos, como demostraciones de su determinación a asumirse como ciudadanos con derechos plenos y en la perspectiva de no dar marcha atrás hasta que se logre alguna negociación, es decir, hasta conseguir estar en igualdad de condiciones para poder alcanzar el objetivo y salir avantes.

Y es que el conjunto de las acciones de resistencia y autoafirmación están funcionando como subsistemas de realimentación positiva que operan reflexivamente al interior del movimiento, y desde luego también al exterior; pero que tal vez lo más impactante es que generan un *continuo de acción contestataria* con alto grado de coordinación y capacidad organizativa, lo que permite al movimiento presentarse “haciendo preguntas” más que “dando respuestas”, o sea, cuestionando las medidas o políticas que les afectan, en una actitud abiertamente retadora y consciente de que les asiste la razón y de que se ha tenido que llegar a esas acciones de alguna manera extremas a causa de la negligencia y falta de respuestas a sus exigencias.

En tal sentido, las autoafirmaciones, además de la dosis de radicalidad que implican, igualmente le imprimen al movimiento un ritmo y una intensidad hasta antes no del todo bien manejados, puesto que suponen un activismo generalizado, altamente politizado y que tiene muy claros los propósitos de las acciones. En una palabra, caracterizan al movimiento en términos de un accionar intrépido y tajante, como un “ya basta” que no deja de resonar y causar estragos al sistema; pero que también impone condiciones y trastoca los tenues límites del anarquismo, sin dejar de estar en la legalidad institucional; aunque con estrategias que apuntan ya no sólo a un cuestionamiento, sino a ir allanando el camino para acceder al poder dentro de cauces democráticos. Lo que sucede es que el sentido de las acciones va hacia la construcción de alternativas de organización de la sociedad, es decir, hacia el cambio social de fondo, por ello, supone un combate constante y cada vez más decidido para hacerse de la fuerza que exige el enfrentamiento con las fuerzas del orden, así como el fortalecimiento de las bases del movimiento, teniendo en claro que con el neoliberalismo y el imperialismo estadounidense no se puede andar con rodeos, sino que son necesarias e impostergables acciones contundentes que permitan acumular fuerzas y mantener esa capacidad de respuesta en cualquier terreno de lucha.

9. Protagonismo en el proceso de cambio social

En estrecha relación con las causas y consecuencias de las acciones autoafirmativas, las y los participantes en el movimiento, precisamente por las cualidades de sus intervenciones, se presentan como protagonistas principales del proceso de cambio social que se busca instituir, lo que de entrada implica que se trata de un movimiento político en dos sentidos: que busca abiertamente y por distintos medios llegar al poder, y asimismo en la medida que está en posición de disputarle tanto al poder en turno como a sus apoyadores la hegemonía, a la vez que despliega toda una serie de acciones colectivas de reivindicación material y de significación (simbólicas) en un complejo social que se fue construyendo desde la base para cimentar y contraponer un proyecto alternativo viable de cambio social.

Asumir este “nuevo” protagonismo supone en principio tres cuestiones: a) que se trata de desempeñar un específico “rol”, ya no únicamente como parte de una protesta social plenamente justificada e históricamente sostenida, sino además, y sobre todo, en términos de un colectivo que representa y encabeza a millones de excluidos, principalmente indígenas-campesinos, que están depositando en ellos su confianza y su destino, razón por la cual, en tanto movimiento social, se reposiciona ante todos los sectores sociales del país, en contra de quienes defienden intereses opuestos o a favor de aquellos

que se identifican con las causas populares, de tal manera que se convierten en el núcleo de una serie de interacciones, tanto “fuertes” como “débiles”, puesto que han ampliado e irradiado su influencia hasta los menos implicados en las movilizaciones directas y en las luchas cotidianas; *b*) asimismo, ser protagónicos significa que desde ya forman parte de un gran colectivo que participa en la toma de decisiones de todo aquello que es del interés y compromiso de las mayorías, en la perspectiva de que el cambio que se está gestando abarca desde luego la forma de hacer política, de representar los intereses comunes y de establecer los vínculos “hacia arriba” y horizontalmente puesto que el protagonismo conlleva principios y valores, o sea, una ética de la responsabilidad ineludible y más aun exigible, y *c*) toda vez que se trata de impulsar una corriente de pensamiento y acción eminentemente solidaria, transformadora y a la vez aglutinante, se busca poder funcionar eficazmente como eje de una coalición de movimientos sociales, lo que supone un grado más elevado de trabajo coordinado, capacidad de negociación y sobre todo de poder dar el ejemplo y mostrar un camino para avanzar en conjunto. En efecto, impulsar las acciones sin centralizar las iniciativas a la vez que se consolidan los triunfos parciales y se despliega una gama de estrategias implica poner en acción no sólo toda la experiencia de años de lucha, a veces clandestina y otras abierta, sino también despertar y motivar la iniciativa de las masas, conviniendo el pluralismo y la tolerancia con la solidez de los principios, sobre todo cuando lo más importante es que el “movimiento de movimientos” pueda avanzar y dar muestras de combatividad en todos los frentes. Por supuesto que el protagonismo es activismo; pero no sólo eso, sino la búsqueda de madurez de todos y cada uno de los movimientos, a efecto no únicamente de “sintonizar” las acciones, sino además debido a que se encuentran en una posición central y por lo mismo delicada puesto que se está en la mirada de miles de compatriotas que ven la necesidad y urgencia de participar organizadamente para respaldar la causa y sacar adelante las demandas (Sanjinés, 2004).

10. Contribución a la profundización de la democracia

Se parte de considerar que el conjunto de medidas neoliberales instrumentadas sin la opción de una victoria popular en más de quince años finalizó en 2000, y, como ya se ha comentado, la “guerra del agua” fue el punto de arranque de una nueva época de las luchas populares configurándose en la primera gran derrota del neoliberalismo. Asimismo, consiguió desarrollar acciones de lucha muy particulares, incluso puso en práctica algo así como un nuevo paradigma de la acción colectiva, puesto que no se limitó a plantear reivindicaciones al gobierno,

sino que organizó y defendió un referéndum en Cochabamba donde votaron cerca de 50 mil personas para tomar la decisión, en forma autónoma, como población directamente implicada si se expulsaba a la transnacional que se había beneficiado con la privatización del agua (Serna, 2007).

Fue así que a unos cuantos meses del triunfo de las acciones colectivas contra la privatización del agua, en septiembre de ese mismo año 2000, se registró un importante levantamiento indígena en la zona aymara, principalmente articulado en torno a demandas relativas al desarrollo rural, como la nueva Ley de Tierras y el rechazo a medidas neoliberales privatizadoras, pero sobre todo se advierte el resurgimiento de las demandas ancestrales de poner fin al racismo y el colonialismo que, además de encontrarse institucionalizados en las prácticas del Estado, en pleno siglo XXI aparecen como elementos directamente implicados en las relaciones sociales y aún los determinan. Como protesta generalizada, más de 500 mil aymaras se movilizaron en una acción impactante, demostrando que, alrededor de la politización profunda de la identidad étnica, se incorporaban las luchas antineoliberales y de emancipación anticolonialista en la Bolivia de hoy.

Esos dos episodios se convirtieron en fundantes de una nueva etapa en las luchas sociales y en el punto de fuga de seis años de protestas casi ininterrumpidas que generaron, en primer lugar una crisis política de enormes dimensiones, la crisis de representatividad de los partidos políticos y de algunas instituciones de la democracia representativa, y después lo que se ha dado en llamar una crisis general del Estado que se manifestó abiertamente a principios de 2003. Entonces, abril y septiembre de 2000 significaron la decisión de los pueblos aymaras para romper y acabar con las estructuras del poder estatal, abriendo así de par en par el camino para avanzar hacia la profundización de la democracia, y representó una gran respuesta colectiva y comunal contra las políticas neoliberales y más de cinco siglos de colonialismo y exclusión de los pobladores originarios.

Recordamos también que en ese año 2000 se dieron otras movilizaciones relevantes de aymaras, no tan visibles como las de Cochabamba, así como las acciones cocalerfas en la zona del Chapare, todo ello, a fin de cuentas, mostró la rearticulación de fuerzas sociales y una serie de victorias contra el Estado que ya perfilaban su trascendencia en la construcción de una democracia desde abajo y radical. En tal sentido, para 2001 las movilizaciones aymaras pasaron de la resistencia a un abierto cuestionamiento al Estado, creándose el llamado Cuartel General indígena en Kalachaka, en la entrada de Alakachi, capital y principal provincia de Omasuyos, que irradiaría su impulso hacia la creación de otros cuarteles generales en toda la región (Serna, 2007).

A casi un mes de un bloqueo muy intransigente, si bien aislado y limitado a la zona rural aymara, se logra temporalmente

un acuerdo y unificación para la lucha de los tres principales movimientos de ese momento: Cocalero, Coordinadora del Agua y Movimiento Aymara, con un pacto de apoyo que no duró mucho; aunque sí logró sostener la lucha aymara y lanzar la protesta con fuerza.

Después vendrían entre 2003 y 2004 las movilizaciones y el referéndum sobre el gas, que el mismo gobierno revertiría en su contra con el incremento al precio del diesel a finales del último año, y finalmente después de ahora sí expulsar a la empresa transnacional, el saldo fue de muchos muertos y cierta desmoralización mostrándose cierta dificultad para impulsar grandes acciones colectivas.

Sin embargo, fue entonces cuando se llega a la última gran movilización por la nacionalización del gas a mediados de 2005, detonada por la aprobación de la nueva Ley de hidro-

carburos. Se trató de una pequeña victoria, ciertamente en condiciones difíciles, a favor de los movimientos sociales. El éxito logra que la consigna de nacionalización del gas se extienda a todo el país y ponga un obstáculo al retorno de los partidos conservadores (MIR, MNR) puedan volver al poder.

De ahí que, como rasgo particular del movimiento social, lo diferencie claramente de otros por el hecho de haber logrado orientar sus acciones a la profundización de la democracia directa y sentar las bases para la participación organizada de la población en su propia representación y defensa de sus intereses, es decir, en haber construido un camino alternativo para la toma de acción y decisiones estratégicas con base en la deliberación y los acuerdos consensados, así como la lucha frontal contra las corrientes autoritarias y retardatarias de los cambios de fondo (Stefanoni, 2008).

oaje

Bibliografía

- Aranda, J. (2005). "Lo nuevo del movimiento social internacional por otra globalización", *Ciencia ergo sum*. Vol.12, Núm.2, julio-octubre, Universidad Autónoma del Estado de México, México.
- Ardaya, G. (1983). "La mujer en la lucha del pueblo boliviano: las Barzolas y el Comité de amas de casa", *Nueva Sociedad*. Núm.65, marzo-abril, Bogotá.
- Arriarán, S. (2007). *La derrota del neoliberalismo en Bolivia, México*, Torres Asociados.
- Cockcroft, J. (2001). "Bolivia", capítulo 15, en J. Cockcroft, *América Latina y Estados Unidos Historia y política país por país*. Siglo XXI, México.
- Figuroa, C. (2008). "América Latina en el umbral del Posneoliberalismo", *Metapolítica*. Núm. 59, mayo-junio, México.
- García, Á. (2007). "El desencuentro de dos razones revolucionarias Indianismo y Marxismo", *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*. Núm. 3, 20 de diciembre, CLACSO.
- Giménez, G. (2004). "Pluralidad y unidad de las ciencias sociales", *Estudios Sociológicos*. Núm.65, mayo-agosto, El Colegio de México, México.
- Harnecker, M. (2002). *Sin tierra construyendo movimiento social*. Siglo XXI, España.
- Kuhn, T. (1971). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Javaloy, F.; Á. Rodríguez y E. Espelt (2001). *Comportamiento colectivo y movimientos sociales*. Prentice Hall, Madrid.
- Mires, F. (1991). "Bolivia: la revolución obrera que fue campesina", *Síntesis*. Núm. 14, Madrid.
- Mirza, C. (2006). *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. La construcción de nuevas democracias*. Asdi, Buenos Aires.
- Moldiz, H. (2007). "Bolivia: crisis estatal y proceso de transformación", en Beatriz Stolicz, *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*, Ed. Aurora, Colombia.
- Nash, J. (2001). "Resistencia cultural y consecuencias de clase en las comunidades mineras de estaño de Bolivia", en Susan Eckstein (coord.). *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*. Siglo XXI, México.
- Retamozo, M. (2006). "Los 'piqueteros': trabajo, subjetividad y acción colectiva en el movimiento de desocupados en Argentina", en *América Latina Hoy*. Abril, Año/Vol. 42, Universidad de Salamanca, España.
- Sanjinés, C. J. (2004). "Movimientos sociales y cambio político en Bolivia", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. Año/Vol. 10, Núm. 001, enero-abril. Universidad Central de Venezuela. Venezuela.
- Serna, J. J. M. (2007). "Movimientos emergentes y nuevo gobierno en Bolivia", en *América Latina, Pasado y Presente*, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos.
- Stefanoni, P. (2008). "Bolivia, ¿En un punto de bifurcación?", *Metapolítica*. Núm. 59, mayo-junio, México.
- Stolicz, B.; J. Valdés; E. Lander; J. Turra y A. Elías 2007. *Gobiernos de Izquierda en América Latina un balance político*. Aurora, Colombia.
- Tarrow, S. (2004). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza ensayo, Madrid.
- Zavaleta, R. (2003). "Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1932-1971)", en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina: historia de medio siglo*, América del Sur, Siglo XXI, México.
- Zivechi, R. (2003). "Movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos. Los nuevos rostros de los de abajo", *La Jornada Suplemento dominical*, México.